

¿INFORMACIÓN O PROPAGANDA? LA PRENSA ESTADOUNIDENSE ANTE LA CRISIS DE HAITÍ (1991-1994)*

Ramón Trujillo Morales

I. INTRODUCCIÓN

Los grandes medios de comunicación escrita estadounidenses – diarios como el *New York Times* y el *Washington Post*, o semanarios como *Time* y *Newsweek*– gozan de un gran prestigio debido a que sus informaciones deben rendir tributo a unas normas de calidad basadas tanto en la exactitud como en la veracidad de los datos y en la adopción de una postura más o menos neutral a la hora de dar cuenta de las situaciones conflictivas. Puesto que estos grandes medios informativos utilizan la democracia y los derechos humanos como varas de medir con las que evalúan las realidades políticas del mundo, es lógico suponer que difícilmente encontraríamos en ellos una perspectiva informativa hostil a la democracia o a los derechos humanos. Sin embargo, el análisis del enfoque informativo que estos grandes medios de comunicación escrita estadounidenses dedicaron a la crisis política padecida por Haití, entre 1991 y 1994, revela que tal enfoque contribuyó a socavar la democracia y el respeto a los derechos humanos en esa república caribeña. Así pues, al confrontar los acontecimientos con su versión mediática esbozaremos la distancia que media entre la teoría y la práctica del quehacer periodístico, y, asimismo, veremos en qué grado la labor informativa estuvo subordinada o no a la difusión de propaganda política.

Para empezar, es preciso tener presente la realidad sociopolítica que constituye el trasfondo de la crisis haitiana. Haití era, y es, el país más pobre de América: para 1989 la renta per cápita era de 394 dólares, si bien menos del uno por ciento de la población acaparaba más de la mitad del ingreso nacional. Durante la segunda mitad del decenio de los ochenta, la esperanza de vida oscilaba en torno a los 54 años; el 75% de los niños menores de cinco años que residía en áreas urbanas se hallaba desnutrido;

* El autor agradece a un comentarista anónimo de esta revista por comentarios y observaciones de una versión preliminar de este informe.

sólo el 36% de la población tenía acceso al agua potable y el consumo diario promedio de calorías únicamente alcanzaba el 85% del nivel mínimo necesario. Entre 1980 y 1991, el producto nacional bruto por habitante había caído alrededor del 2% anual (Dupuy 1997:24; Cepal 1993:15; USAID 1989:7-8; Grant 1992:76 y 74; IDB 1995:3). Son datos que muestran la magnitud de la creciente miseria que soportaba la población haitiana a lo largo de los años ochenta. Esa situación de miseria se consolidó durante el decenio de los noventa: Haití cada vez producía menos alimentos; el gasto en salud por persona era inferior al del África subsahariana y, según el Fondo Monetario Internacional, los salarios reales haitianos de 1997 representaban la quinta parte de su valor de 1981¹.

Esta desastrosa situación socioeconómica es un legado de los gobiernos dictatoriales haitianos. Un dato resume el daño económico causado por los veintinueve años de dictadura de los Duvalier: en 1986, inmediatamente después de que Jean-Claude Duvalier huyera de Haití, la comisión investigadora de las finanzas públicas estableció que el dictador, su esposa y sus colaboradores habían sustraído al Estado una cantidad de dinero semejante al total de la deuda externa nacional (Hooper 1987:36)². El régimen que había sido calificado de “cleptocracia” (Prince 1985:8) por un comité parlamentario canadiense dejó buenos discípulos: los nuevos gobiernos militares, que llegaban prometiendo democracia y se iban cuando el país se hacía ingobernable a causa de los abusos que cometían, perpetuaron las prácticas corruptas y represivas que habían socavado el bienestar de la población y el respeto a sus derechos fundamentales³. Pero, por último, ese ciclo de violencia y corrupción pareció llegar a su fin cuando Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote católico muy comprometido con los sectores democráticos, ganó las primeras elecciones libres de Haití, celebradas en diciembre de 1990. Sin embargo, a pesar de que obtuvo el 67% de los votos, su gobierno duró sólo siete meses hasta que fue derrocado por el golpe militar del 30 de septiembre de 1991.

II. ¿PROMOVER LA DEMOCRACIA?

Inmediatamente después del golpe militar, James Baker, el secretario de Estado del gobierno estadounidense, declaró que el “golpe no debe tener y no tendrá éxito” y, dos días más tarde, el presidente Bush afirmaba que desearía ver “al presidente Aristide devuelto al poder” (Ives 1994:16). La Organización de Estados Americanos condenó el golpe y recomendó el aislamiento diplomático, económico y financiero de las nuevas autoridades ilegítimas de Haití. Sin embargo, mientras que, por una parte, la Administración Bush se comprometía públicamente con la restauración de la democracia haitiana, por otra, adoptaba algunas medidas que hacían

viable el régimen golpista: el embajador de Estados Unidos pedía que Aristide regresara en un plazo de seis meses, la dimisión de su primer ministro y la elección de uno nuevo. Es más, la Casa Blanca pronto se desentendería de las notorias violaciones que iba a sufrir el embargo económico impuesto al país caribeño (UN 1995:1-2; Haitian Information Bureau 1994:209, 210 y 212). Pero, sobre todo, serían los grandes medios de comunicación estadounidenses los que neutralizarían la presión pública para que se restableciera rápidamente la democracia en Haití. Los principales periódicos adoptaron un marco explicativo de la crisis haitiana que igualaba a los demócratas y a los golpistas sugiriendo que ambos violaban los derechos humanos más o menos de la misma manera.

Un estudio sobre el espacio dedicado a la violencia política en Haití, durante los tres meses posteriores al golpe militar, en las páginas del New York Times, el Washington Post y el Miami Herald, determinó que el 43% del espacio correspondía al gobierno democrático y el 57% a la violencia que a la sazón ejercía el régimen militar⁴. Es decir, los principales periódicos de Estados Unidos estaban dedicando un espacio similar a la violencia pasada del régimen democrático que a la violencia coetánea del régimen dictatorial. El mensaje implícito era obvio: el régimen militar no es mucho peor que el gobierno democrático de Aristide. Y, sin embargo, sí que lo era: de febrero de 1991 a diciembre de 1992, el total de muertes violentas ocurridas bajo el gobierno democrático, excluidos los crímenes comunes, ascendía a 43 fallecidos y, bajo el régimen golpista, se habían documentado 1.867 ejecuciones extrajudiciales⁵. Estos datos muestran que, durante el período señalado, el 2.3% del total de las muertes provocadas por la violencia política se produjo bajo el gobierno de Aristide y el 97.7% bajo el régimen golpista, el cual, además, fue responsable directo de las ejecuciones llevadas a cabo por su aparato represivo. Las primeras veinticuatro horas de gobierno de los militares provocaron más muertes que siete meses de democracia (Amnesty International 1992a:4). De hecho, el gobierno democrático había logrado una reducción espectacular de la violencia política en comparación con los que le precedieron y con los que le sucedieron. Un informe de Americas Watch y de otras organizaciones de derechos humanos mostraba que la violencia política se había cobrado alrededor de veinte vidas mensuales bajo la presidencia de la antecesora de Aristide y unas ocho al mes bajo la administración de este último. De modo que la prensa de Estados Unidos estaba criticando con dureza precisamente el historial de derechos humanos del gobierno haitiano que más los había respetado durante el siglo XX.

III. FUENTES DIPLOMÁTICAS ANÓNIMAS

Ni el *New York Times* ni el *Washington Post*, habían publicado una sola información sobre abusos contra los derechos humanos en Haití a lo largo de los siete meses de gobierno democrático en 1991. Es más, un día antes del golpe de estado, Aristide había sido descrito por el *New York Times* como un “acérrimo defensor de los derechos humanos” (D’adesky 1992:18), pero inmediatamente después del golpe era convertido en un violador de esos mismos derechos. Según el diario neoyorquino, los funcionarios estadounidenses se habían distanciado del presidente haitiano “citando preocupaciones sobre su historial de derechos humanos” (*New York Times*, Oct. 7, 1991). En cuanto los redactores de los medios más influyentes comprendieron que a la Casa Blanca no le gustaba el gobierno de Aristide, se identificaron con la propaganda de la Administración Bush y la reprodujeron como si se tratara de información. El *New York Times* llegó a afirmar que el líder golpista, el teniente general Raoul Cédras, cumplía órdenes de sus subordinados y que en “el momento en que los soldados empiecen a pensar que Cédras está negociando el retorno de Aristide, simplemente pueden matarlo”. El diario otorgaba credibilidad a unas declaraciones del dirigente golpista en las que negaba haber planeado el golpe de estado o querer mantenerse en el poder, y, asimismo, recogía la hipótesis de que el golpe militar se había producido debido a la indignación experimentada por los “soldados rasos” ante un presidente “que parecía condonar repetidamente el uso de la violencia para lograr sus fines” (*New York Times*, Oct. 4, 1991). Es absurdo plantear que los integrantes de un ejército responsable de la muerte de unas cinco mil personas, a lo largo de los cinco años previos (*Haiti Info*, April 23, 1994), se hallaban indignados por la violencia que supuestamente toleraba el que, en cualquier caso, era el gobierno menos violento de los últimos decenios. Aristide había gobernado “con la ayuda del miedo y de un estrecho círculo de amigos”, según informaba el principal periódico de Estados Unidos, el cual, asimismo, añadía que “en la Asamblea Nacional, que se convirtió en el centro de la vida política haitiana tan pronto como el ejército dejó claro que no tenía el deseo de mantenerse en el poder, un suspiro de alivio se pudo escuchar entre los senadores y los diputados, que habían llegado a aborrecer a un presidente autoritario al que habían festejado recientemente” (*New York Times*, 22, 10, 1991). Ese “centro de la vida política” a que alude el *New York Times* se refiere a menos de la tercera parte de los legisladores que, de forma ilegal, nombraron a un nuevo presidente después de que el ejército rodeara el Parlamento y disparara sobre el edificio (OAS 1994:43; *Los Angeles Times*, Oct. 13, 1991). Este tipo de información se atribuía a diplomáticos no identificados y también se sustentaba en la

descontextualización de los problemas reales de violencia política que había vivido Haití. La cobertura fue tan sesgada que provocó una manifestación de protesta, a las tres semanas del golpe, de unos dos mil haitianos ante la sede del periódico en Nueva York (New York Times, Oct. 23, 1991). Un año y medio después, el principal corresponsal para Haití del New York Times era recibido por el portavoz de los golpistas en las negociaciones auspiciadas por la ONU con las siguientes palabras: “¡Nuestro señor ministro de Exteriores! ¡Bienvenido!” (Farmer 1994:237).

Debe tenerse presente que, mientras que los medios informativos criticaban las faltas reales y ficticias del gobierno de Aristide, el régimen de Cédras estaba llevando a cabo una gran campaña de terrorismo de estado contra los partidarios del presidente exiliado. En los días que siguieron al golpe militar, los soldados abrieron fuego indiscriminadamente contra la población y causaron la muerte a cientos de personas. A partir de entonces, quienes vivían en áreas consideradas favorables al regreso de Aristide quedaron expuestos a todo tipo de agresiones por parte de los militares: desde destrucción de viviendas, extorsiones o robos, hasta palizas, torturas y asesinatos. El régimen se implicó en lo que fue descrito por Naciones Unidas como una política de “represión preventiva”, que obligó a 300.000 personas a huir de sus hogares (Amnesty International 1992b:9; Amnesty International 1994:3; UN 1993:parágrafo 14). Cuando concluyó la crisis, después de tres años en el poder, los militares habían hecho descender el producto interior bruto un 30%; habían provocado un aumento del 50% en la tasa de desempleo; se habían duplicado la desnutrición infantil y el número de niños abandonados en la calle, al mismo tiempo en que la tasa de mortalidad materna aumentaba en un 29% (IDB 1995:3; Gibbons 1999:95). Todo esto muestra que el régimen de Cédras fue un completo desastre para la economía y para los derechos humanos, es decir, exactamente lo contrario que el gobierno de Aristide en 1991⁶. El legado golpista perduraría hasta el presente: las administraciones democráticas posteriores a esta etapa de gobierno militar ya no serían capaces de obtener mejoras económicas significativas y tampoco estarían en condiciones de garantizar el respeto a los derechos humanos en la medida en que lo había logrado el gobierno de Aristide antes del golpe. La cobertura de la realidad haitiana ofrecida por la prensa estadounidense contribuiría al contexto de desmoralización e impotencia política en que algunas de sus acusaciones falsas acabarían por tornarse veraces.

La crisis concluyó cuando la Casa Blanca invadió Haití, en septiembre de 1994, y, a continuación, permitió el regreso del gobierno democrático. Así logró su objetivo publicitario de presentarse como promotora internacional de la democracia. Pero, en realidad, los tres años

de régimen golpista le habían permitido obtener toda clase de concesiones de la administración democrática exiliada que, en lo sucesivo, dependería por completo de Washington. Los medios de comunicación ocultaron esta realidad mediante el descrédito del gobierno haitiano en el exilio y a través de la divulgación de la propaganda de las administraciones Bush y Clinton.

Mientras se desarrollaban las negociaciones para resolver la crisis haitiana, el diario Los Angeles Times explicaba que la Casa Blanca se enfrentaba al dilema de querer “favorecer el principio de que el derrocamiento de un gobierno constitucional no puede ser tolerado” y, al mismo tiempo, tener que apoyar a un dirigente “antidemócrata” y “antiamericano” (Los Angeles Times, July 6, 1992). El Washington Post afirmaba que la reacción de la Organización de Estados Americanos al derrocamiento de Aristide “estuvo guiada en parte por malentendidos sobre la naturaleza de su gobierno”, pues pensaron que se trataba de un líder genuinamente demócrata, pero sus “credenciales democráticas” no eran “completamente puras ni él era un líder particularmente eficaz” (Washington Post, May 31 1992). Este tipo de enfoques se generalizó en las fechas cercanas a la invasión estadounidense de septiembre de 1994. En las páginas de Newsweek se leía que “algunos americanos pueden concluir que Aristide no es mucho mejor que los generales” haitianos puesto que, aunque gozaba del apoyo y el afecto de la mayoría pobre, “el inconstante sacerdote católico romano es un demagogo marxista antiamericano cuyo compromiso con la democracia y los derechos humanos” (Newsweek, Sept. 19, 1994) está lejos de ser sólido. En su siguiente edición, el semanario completaba la imagen de Aristide afirmando que era “un demagogo antiamericano, un populista de izquierdas inestable que amenazó a la empresa privada y condonó la violencia contra sus oponentes políticos” (Newsweek, Sept. 26, 1994). Por su parte, Time informaba de “una serie de alegaciones no confirmadas, pero sensacionales, de que Jean-Bertrand Aristide, el antiguo presidente de Haití, se llevó cientos de miles de dólares, al hacerse la vista gorda, en dinero de los cárteles de la droga colombianos, mientras estaba en el cargo”. Time reconocía que las fuentes no eran fiables: “ninguna de las afirmaciones ha sido fundamentada y las fuentes pueden tener motivaciones sospechosas”⁷.

En realidad, los medios informativos ya habían estado presentando la cuestión haitiana dentro del marco facilitado por fuentes con “motivaciones sospechosas”. En octubre de 1993, Brian Latell, el principal analista de la CIA para América Latina, se reunió con varios senadores estadounidenses para contarles que Aristide padecía desórdenes psicológicos y mostró una carta de un médico canadiense que avalaba sus afirmaciones y que, posteriormente, se supo que era una falsificación (Danner 1993:44-45;

Rampton 1994:9-10). La CNN informó que “el perfil psicológico [de la CIA] sugiere firmemente que Jean-Bertrand Aristide puede estar mentalmente trastornado” (Danner 1993:44) y el Washington Post refirió el apoyo dado por el director de la CIA a las afirmaciones de Latell y las explicó con detalle (Washington Post, Oct.24, 1993). Newsweek citó al senador Jesse Helms declarando que el presidente Aristide “es un psicópata” (Newsweek, Nov.1, 1993), pero reflejó además la opinión de algunos funcionarios del Senado para los que el asunto se reducía a una campaña de desinformación. Time también se refería a la cuestión de la salud mental del presidente haitiano exiliado y reconocía que “incluso si [Aristide] no fue un demócrata a tiempo completo, el historial de derechos humanos global de Haití mejoró durante su breve presidencia” (Time, Nov.1, 1993). Es evidente que para los simpatizantes de los golpistas haitianos era un éxito haber logrado que los principales medios de comunicación emplearan buena parte de su espacio dedicado a Haití en discutir sobre la salud mental del presidente exiliado, tanto si concluían que se trataba de una campaña desinformativa como si diagnosticaban una enfermedad mental.

IV. PROBLEMAS “CULTURALES”

Para los grandes medios de comunicación la inferioridad de Haití resultaba tan evidente que les impedía percibir el racismo que destilaban sus crónicas informativas. Uno puede pensar que ha habido un gran progreso ético desde la época en que la revista National Geographic describía a los campesinos haitianos como “irreflexivos animales negros del interior” (Lawless 1992:37), o en que el futuro presidente Franklin Roosevelt recordaba divertido la reflexión de un amigo suyo cuando conoció al ministro de Agricultura haitiano: “no pude evitar decirme que ese hombre habría dado 1.500 dólares en una subasta en Nueva Orleans como semental” (Mintz 1995:84-5). Pero la prensa anglosajona de nuestros días no está muy por encima del racismo antihaitiano de comienzos de siglo. El New York Times cita a un experto en Haití que afirma que los obstáculos para construir una democracia en el país caribeño “no son materiales, son psicológicos y culturales” (New York Times, August 14, 1994). El semanario británico The Economist indicaba que la reconciliación nacional llevaría tiempo porque “el instinto haitiano es golpear a los enemigos de uno, no abrazarlos” (The Economist, Oct. 22, 1994). “La venganza”, afirmaba Newsweek, “no las votaciones, ha sido el camino haitiano” (Newsweek, Oct. 22, 1994). Para los medios informativos es obvio que la cultura haitiana es particularmente violenta o que, como explicaba el embajador de Estados Unidos en 1988, “las violaciones de los

derechos humanos son endémicas a la tradición haitiana” (Wilentz 1990:358). Cuando fue enviado por Clinton a Haití para negociar la retirada de los golpistas, el mismísimo ex presidente Carter afirmaría desconocer “quién es responsable de las atrocidades en Haití. Esta es una sociedad violenta y las divisiones son extremas” (Time, Oct. 3, 1994). Estas dudas eran expresadas a los pocos días de la emisión de un mensaje televisado en el que Clinton había dejado claro que “sólo el general Cédras y sus cómplices son responsables de este sufrimiento y de esta terrible tragedia humana. Son sus acciones las que han aislado a Haití” (Haiti Info, Sept. 23, 1994). Sin embargo, Carter quedó tan favorablemente impresionado por la calidad humana de Cédras que elogió su patriotismo, lo invitó a visitar su iglesia, declaró que el líder golpista y su esposa eran “encantadores” y comentó a la CNN que no le había pedido a Cédras que abandonara Haití, como exigía la ONU, porque era “una seria violación de los derechos humanos inherentes a un ciudadano ser obligado al exilio” (Ibid.). La conducta del ex presidente conmovió al New York Times que elogió a ese “abogado de los sin techo” que encuentra “tiempo para escribir poesía” y “posee el particular encanto del hombre bueno que no ha codiciado o solicitado laureles” (New York Times, Sept. 19, 1994). Según The Times, la actuación de Carter en Haití hacía que debiera “ahora ser considerado un claro favorito” (The Times, Sept. 20, 1994) para recibir el Premio Nobel de la Paz y, por su parte, Newsweek se refería admirativamente al Centro Carter de Atlanta como a “una especie de Departamento de Estado alternativo” (Newsweek, Oct. 3, 1994).

The Times publicó un artículo de opinión dedicado a la invasión de Haití en el que se explicaba sin tapujos el problema de fondo: “hay ciertos países, entre los que se encuentra Haití, que se han mostrado incapaces de un autogobierno decente durante muy largos períodos”. De modo que, sólo si los estadounidenses estuvieran dispuestos a quedarse en el país caribeño, “tratando a Aristide como una marioneta, habría alguna oportunidad de crear un Haití independiente viable, quizá después del trabajo de una generación”. Esto llevaría mucho esfuerzo y costaría mucho dinero, pero podría lograrse. “Los americanos entonces estarían haciendo el trabajo del Imperio Romano, o del Británico, transfiriendo la tecnología social de una civilización avanzada a una sociedad problemática. Al fin y al cabo, ese fue su regalo al Japón después de la Segunda Guerra Mundial” (Rees-Mogg 1994:19). En suma, se trataba del problema que explicaba un experto a la revista Time cuando afirmaba que Washington podía adiestrar al ejército y a la policía haitiana pero que, “mientras la cultura dominante conceda un premio al autoritarismo, la deshonestidad y el uso de la fuerza, los nuevos militares y la policía finalmente volverán a las pautas de antaño” (Time,

Oct. 10, 1994). Sin embargo, volviendo al mundo real, si queremos entender verdaderamente hasta qué punto es “violenta” la cultura haitiana, podemos comparar la tasa de asesinatos de Haití, durante los meses del gobierno de Aristide, con la tasa de asesinatos de Estados Unidos: la tasa haitiana fue unas nueve veces ‘inferior’ a la estadounidense (Naureckas 1994:7). Por lo demás, la suposición de que el adiestramiento militar y policial estadounidense puede solucionar el problema de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad haitianas es, en el mejor de los casos, ingenua. Raoul Cédras, el líder golpista que había sido informante de los servicios de espionaje estadounidenses, declaró que el “75% de nuestro personal es entrenado en Estados Unidos” (Hitchens 1993:522). Michel François, el jefe de policía y una de las figuras clave de la dictadura, había sido entrenado por militares estadounidenses en Fort Benning y, además, según un informe del Senado de los Estados Unidos, durante los años del régimen golpista, los narcotraficantes colombianos le habían estado pagando unos 100 millones de dólares anuales por su ayuda para introducir drogas ilegales en Estados Unidos (Jallot 1994:30). La prensa no se preguntó por qué la Casa Blanca nunca había intentado extraditarlo por su involucración en el narcotráfico, al igual que había hecho con el general panameño Manuel Antonio Noriega. Por último, Emmanuel Constant, el líder del grupo paramilitar haitiano más temido, fue un agente pagado por la CIA entre 1991 y 1994⁸. Son tres muestras significativas del carácter cosmopolita de la “cultura violenta” haitiana.

El racismo de la prensa fue superado por el de la embajada de Estados Unidos en abril de 1994. En aquella época la violencia del régimen de Cédras se hizo particularmente intensa: un informe de la Organización de Estados Americanos daba cuenta del fuerte aumento que se había producido en la práctica consistente en abandonar cadáveres mutilados en lugares públicos de la capital con el fin de acrecentar el clima de terror. También se produjo un espectacular aumento de las violaciones sexuales políticamente motivadas (OAS 1994:34 y 51⁹). Pues bien, la embajada envió un informe al secretario de Estado que restaba importancia a las violaciones de los derechos humanos y se refería a las violaciones sexuales afirmando que “por una variedad de razones culturales (no agradables de contemplar), la violación nunca ha sido considerada como un delito serio aquí”. El problema consistía en que se intentaba hacer una comparación con Bosnia: “Sospechamos, francamente, del repentino alto número de violaciones denunciadas, particularmente en esta cultura, que ocurren al mismo tiempo en que los activistas de Aristide buscan trazar una comparación entre Haití y Bosnia” (Embajada de EE.UU en Haití 1994, 186-7). Cuando Time comentó este asunto, se limitó a criticar a los

partidarios de Aristide que habían pedido la destitución de varios diplomáticos estadounidenses, a raíz de la difusión del informe, porque era una postura “difícilmente favorable a la asociación” (Time, May 23, 1994) entre Aristide y la Casa Blanca.

Para entender hasta qué punto era difícil “la asociación” entre Aristide y la Casa Blanca podemos referirnos a la ocasión en la que un grupo de parlamentarios haitianos viajó a Washington, en febrero de 1994, y propuso un plan para restaurar la democracia en Haití que no estipulaba fecha alguna para el retorno del presidente exiliado, ni la supervisión de la ONU para garantizar el proceso, ni sanciones en caso de incumplimiento por parte de los militares. En suma, se trataba de un plan que preservaría la influencia política de los sectores golpistas detrás de una fachada democrática difícilmente creíble y que resultaba mucho más perjudicial para los sectores democráticos que lo acordado en las negociaciones auspiciadas por la ONU ocho meses atrás¹⁰. No obstante, el plan de los parlamentarios haitianos recibió el apoyo del secretario de Estado estadounidense y fue remitido por el secretario general de la ONU al Consejo de Seguridad, indicando que se trataba de un “desarrollo significativo” (UN 1994: parágrafo 3) para salir de la crisis. Sin embargo, a pesar de estos apoyos, el plan “haitiano” quedó en evidencia muy pronto: cuando el enviado especial de Clinton para Haití, Lawrence Pezzullo, comparecía ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el 8 de marzo, afirmaba que el plan parlamentario “haitiano” había sido elaborado por el Departamento de Estado, y añadía que se habían canalizado fondos con el propósito de costear los gastos de la delegación haitiana que viajó a Washington y que esa delegación había sido escogida por el embajador de Estados Unidos en Haití, pues “pensamos que sería un grupo representativo para venir aquí” (Morley y McGillion 1997:373). Pero estos hechos serían considerados irrelevantes: el que la Administración Clinton se ocultara detrás de la financiación de un grupo parlamentario haitiano con el objeto de socavar las posiciones de los sectores democráticos del país caribeño, no suscitaría cuestionamiento alguno de las metas políticas defendidas en público por la Casa Blanca. Para los grandes medios informativos el compromiso de Washington con la democracia haitiana era un dogma de fe que no podían cuestionar ni los hechos.

Los grandes medios de comunicación escrita socavaron la credibilidad de los demócratas haitianos e impidieron a sus lectores conocer la realidad del notable experimento democrático llevado a cabo en Haití en 1991. Puesto que para esos medios lo importante era insistir en que la Casa Blanca iba a restaurar la democracia en el país caribeño, no se preguntaron por el significado de los acontecimientos que ponían en

evidencia los esfuerzos de Washington para debilitar al movimiento democrático haitiano y para prestar un cierto apoyo a los golpistas. Hay un ejemplo que ilustra muy bien esto último.

Durante casi todo el tiempo de la crisis estuvo en vigor algún tipo de embargo comercial contra Haití que, en teoría, se proponía hacer caer al régimen golpista. Esos embargos fueron muy defectuosos porque, en la práctica, la Casa Blanca no quería que provocaran la caída del régimen militar. Pues bien, justo cuando empezaba la invasión de Haití, la Associated Press informó que la Administración Bush había presionado a la agencia gubernamental estadounidense encargada de la aplicación de los embargos económicos para que no sancionara a Texaco por haber violado ciento sesenta veces el embargo impuesto a la república caribeña¹¹. Es decir, esta información mostraba que la Casa Blanca había saboteado sus propias sanciones y eso era algo que no encajaba con la afirmación de que el objetivo prioritario de Washington era restablecer la democracia en Haití. La información fue difundida por la Associated Press y la Agence France Press precisamente cuando la atención informativa internacional estaba centrada en la invasión de Haití. ¿Cómo trataron estas revelaciones los medios informativos? La respuesta es muy simple: los medios informativos no trataron el asunto debido a que no encajaba con su versión de los acontecimientos. Simplemente, lo ocultaron. Es difícil imaginar un régimen totalitario con un Ministerio de Propaganda capaz de un éxito tan notable.

V. CONCLUSIÓN

Los grandes medios de comunicación escrita estadounidenses elaboraron un marco interpretativo de la crisis haitiana hostil a Aristide y a los sectores democráticos que lo habían llevado al poder. Ese marco interpretativo se derivó de un alineamiento de los informadores con la Casa Blanca que les llevó a ocultar algunos hechos que cuestionaban la explicación dada por Washington a su política haitiana y que dio cabida a informaciones de carácter racista y al falseamiento de importantes aspectos de la crisis haitiana. Si consideramos que en la información prevalecen todos los datos veraces relevantes para la interpretación de los acontecimientos que se ofrece, tanto si la corroboran como si la contradicen, y que en la propaganda prevalece el objetivo de producir ciertos efectos en sus destinatarios sobre el carácter veraz de sus datos, entonces debiéramos concluir que los grandes medios de comunicación escrita estadounidenses se dedicaron, más que a informar, a divulgar la propaganda de la Casa Blanca. Debe tenerse presente que en Estados Unidos existen importantes mecanismos institucionales para que la opinión

pública influya sobre la acción de gobierno. Si esa opinión pública hubiera sido correctamente informada del papel que estaba jugando Washington en la crisis haitiana es muy probable que las administraciones Bush y Clinton hubieran tenido que cambiar su política hacia Haití. Por tal motivo, no debemos infravalorar la contribución que hicieron los grandes medios informativos estadounidenses a la viabilidad del régimen militar haitiano.

Notas

1. Si se establece 100 como índice promedio de producción agrícola para el período 1979-81, tenemos que en 1982-84 el índice era 103 y, para 1992-94, había descendido a 86. En términos *per cápita* los índices respectivos fueron 98 y 67 (Instituto de Recursos Mundiales 1997:265 y 263). En 1995, el gasto total de Haití en salud fue de 21 dólares por persona, en comparación con el promedio de 38 dólares para el África subsahariana, y de 202 dólares para América Latina (World Bank 1998:33). Los datos sobre los salarios reales se recogen en Economist Intelligence Unit (1999:50).
2. Según la comisión investigadora se apropiaron de 505 millones de dólares. En 1983, la deuda externa de Haití era de 511 millones de dólares (Instituto de Recursos Mundiales 1997:185).
3. Durante el período 1986-1990, el Comité de Abogados para los Derechos Humanos de Nueva York elaboró un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití. El informe mostraba la gran variedad de prácticas represivas que caracterizaba la labor de las fuerzas de seguridad: desde la imposición de impuestos arbitrarios, o la extorsión a los familiares de las personas arrestadas de forma ilegal si querían que su pariente quedara en libertad, hasta los asesinatos políticos, pasando por los malos tratos y el uso de la tortura. La imposibilidad de encontrar protección en los tribunales quedaba puesta de relieve en una de las conclusiones a que llegaron los abogados estadounidenses: “No hay sistema de justicia en Haití. Incluso hablar de un ‘sistema haitiano de justicia’ dignifica el brutal uso de la fuerza por oficiales y soldados, el caos de los tribunales y las prisiones haitianas y la corrupción de jueces y fiscales” (Lawyers Committee for Human Rights 1990:1).
4. “Human Rights in Haiti”. En EXTRA!, enero-febrero de 1993, p. 22; Orenstein (1993:15).
5. Para la violencia política haitiana durante el gobierno de Aristide de 1991 y los de sus predecesores véase Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Caribbean Rights (1991:5, 6, 10, 22 y 23). Para la cifra de ejecuciones ofrecida por la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos véase Haiti Info (Dec. 19, 1992).
6. Los grandes medios de comunicación siempre han considerado de forma gratuita que los siete meses del primer gobierno de Aristide fueron un fracaso económico. La realidad es muy distinta: el volumen comprometido de financiación externa para la república caribeña se duplicó; la inflación pasó del 26% al 11%; el producto nacional bruto creció el 4.9%; aumentaron los ingresos gubernamentales debido a las mejoras en el cobro de impuestos y a la campaña contra la corrupción, y, asimismo, varias empresas públicas

dejaron de ocasionar pérdidas y empezaron a producir beneficios (Center for International Policy 1992:1-5; National Labor Committee 1993:36; Economist Intelligence Unit 1999:41; Dupuy 1997:119). Posteriormente, Vicky Huddleston, la segunda responsable de la embajada de Estados Unidos en Haití, informaría en un cable al Departamento de Estado, que fue desclasificado en 1994, de “los esfuerzos sorprendentemente exitosos del gobierno de Aristide [...] rápidamente anulados después del golpe” (Chomsky 1994, 56). Básicamente hubo tres objetivos socioeconómicos del gobierno democrático que resultaron inadmisibles para los defensores del *statu quo* haitiano: primero, la propuesta gubernamental de mejorar las condiciones laborales y los salarios se encontró con la oposición de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), que afirmaba que el precio de la mano de obra haitiana debía fijarse “en relación a la productividad y no a preocupaciones sociales –los programas de bienestar debieran estar completamente fuera del sistema de salarios para no distorsionar los costos laborales al alza, creando un incremento en los costos laborales por unidad en las exportaciones y la reducción concomitante en las posiciones competitivas mundiales” (USAID 1991:36-7). En aquel entonces, según un informe del National Labor Committee, los salarios haitianos no cubrían las necesidades básicas del trabajador promedio y de su familia (National Labor Committee 1992:18-21). En segundo lugar, la buena gestión de unas empresas públicas que no se deseaba privatizar representaba una política de promoción del sector público incompatible con las privatizaciones que debían llevarse a cabo en una etapa posterior del ajuste estructural impuesto a Haití (Costello y Sanahuja 1996:12-14). Por último, los propósitos de redistribución de la riqueza y aumento del gasto social que tenía el gobierno de Aristide tampoco encajaban con las prescripciones de los planes de ajuste. Estos objetivos se frustraron con el golpe militar de septiembre de 1991.

7. Time, Sept. 26, 1994. Las pautas “profesionales” y de “neutralidad” de Time se pusieron de manifiesto en un caso similar. En 1987, un redactor de Time intentó la publicación de un reportaje, adecuadamente documentado, sobre la implicación, en el tráfico de estupefacientes, de la red de suministro a la Contra nicaragüense, organizada por el coronel Oliver North. El reportaje fue devuelto varias veces a su autor para que lo rehiciera. En 1991, el reportero relataba a una revista dedicada al análisis de los medios de comunicación que un editor de Time le había explicado lo sucedido: “Time está institucionalmente detrás de los contras. Si este reportaje fuera sobre los sandinistas y las drogas, no tendrías problema en meterlo en la revista” (Naureckas 1994:6).
8. La organización de Constant, responsable de cientos de asesinatos y torturas, combatió la política que la Casa Blanca defendía públicamente. El secretario de Estado, Warren Christopher, reconoció la relación de la CIA con Constant afirmando que, “durante años, los Estados Unidos han intentado frecuentemente obtener información de algunas personas con las que no desearíamos estar asociados, y creo que está en esa categoría” (CBS News Transcripts 1995:5).
9. Para la cuestión de las violaciones sexuales véase Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, 1994.
10. El Acuerdo de la Isla de los Gobernadores, firmado en julio de 1993, establecía una fecha para el regreso del presidente legítimo, la supervisión del proceso de transición a la democracia por parte de la ONU y la imposición de sanciones si era incumplido por alguno de los firmantes.

11. Associated Press, (Sept. 19, 20, 29 y Oct. 1, 1994); *Agence France Press*, (Sept. 20, 1994).

Referencias bibliográficas

Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Caribbean Rights (1991), *Haiti. The Aristide Government's Human Rights Record*. Nueva York: AW, NCHR, CR.

Amnesty International (1992a), *Haiti. The Human Rights Tragedy. Human Rights Violations since the Coup*. Londres: AI.

_____ (1992b), *Haití. La tragedia*. Madrid: AI.

_____ (1994), *Haití. Entre la espada y la pared: ¿represión militar o invasión extranjera?* Madrid: AI.

CBS News Transcripts (1995), *Toto Constant; FRAPH Leader Toto Constant Worked with the CIA Against President Clinton's Orders When the US Military Was in Haiti*. Nueva York: CBS.

Center for International Policy (1992), *Mobilizing Resources for Development. A Retrospect on President Aristide's Economic Strategy for Haiti and His Administration Record with Aid Donors*. Washington, D. C.: CIP.

Cepal (1993), *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 1993*. Santiago de Chile: Cepal.

Chomsky, Noam (1994), "Democracy Enhancement, II: Haiti", *Z Magazine*, Vol. 7, No. 7/8, pp. 52-65.

Costello, Patrick y José Antonio Sanahuja (1996), *Haití: los desafíos de la reconstrucción*. Madrid: Centro de Investigación para la Paz.

D'adesky, Anne-Christine (1992), "Haitians Protest One-Sided Coup Coverage", *EXTRA!*, Vol. 5, No. 1, p. 18.

Danner, Mark (1993), "The Fall of the Prophet", *The New York Review of Books*, Vol. XL, No. 20, pp 44-53.

Dupuy, A. (1997), *Haiti in the New World Order. The Limits of the Democratic Revolution*. Boulder (Colorado): Westview Press.

Economist Intelligence Unit (1999), *Dominican Republic, Haiti, Puerto Rico Country Profile 1999-2000*. Londres: EIU.

Embajada de EE.UU. en Haití (1994), "Haiti Human Rights Report", en J. Ridgeway, ed., *The Haiti Files. Decoding the Crisis*. Washington, D. C.: Essential Books, pp 184-190.

Farmer, Paul (1994), *Haití para qué*. Hondarribia (Guipúzcoa): Argitaletxe HIRU.

- Gibbons, Elizabeth D. (1999), *Sanctions in Haiti. Human Rights and Democracy Under Assault*. Westport: Praeger Publishers.
- Grant, J. P. (1992), *Estado Mundial de la Infancia*. Barcelona: J&J Asociados.
- Haitian Information Bureau (1994), "Chronology. Events in Haiti, October 15, 1990-May 11, 1994", en J. Ridgeway, ed., *The Haiti Files. Decoding the Crisis*. Washington, D. C.: Essential Books, pp. 205-240.
- Hitchens, Christopher (1993), "Minority Report", *The Nation*, 8 de noviembre, p 522.
- Hooper, Michael S. (1987), "Fingers in the Till", *NACLA Report on the Americas*, Vol. XXI, No. 3, p 36.
- Human Rights Watch/Americas (HRW/A) (undated), *Rape in Haiti. A Weapon of Terror*. Washington, D. C.: National Coalition for Haitian Refugees (NCHR).
- Instituto de Recursos Mundiales (1997), *Recursos mundiales*. Madrid: Ecoespaña Editorial.
- Inter-American Development Bank (1995), *Emergency Economic Recovery Program. Haiti*. Washington, D. C.: IDB.
- Ives, Kim (1994), "The Unmaking of a President", *NACLA Report on the Americas*, Vol. XXVII, No. 4, pp. 16-29.
- Jallot, Nicolas (1994), "Haïti: plaque tournante de la drogue", *Le Point*, 28 de mayo, pp. 28-37.
- Lawless, Robert (1992), *Haiti's Bad Press*. Rochester (Vermont): Schenkman Books.
- Lawyers Committee for Human Rights (1990) *Paper Laws, Steel Bayonets: Breakdown of the Rule of Law in Haiti*. Nueva York: LCHR.
- Mintz, Sidney (1995), "Can Haiti Change?", *Foreign Affairs*, Vol. 74, No. 1, pp 73-86.
- Morley, Morris, Chris McGillion (1997), "'Disobedient' Generals and the Politics of Redemocratization: The Clinton Administration and Haiti", *Political Science Quarterly*, Vol. 112, No. 3, pp 363-384.
- National Labor Committee (1993), *Haiti After the Coup: Sweatshop or Real Development?* Nueva York: NLC.
- Naureckas, Jim (1994), "Enemy Ally: The Demonization of Jean-Bertrand Aristide", *EXTRA!* Vol. 7, No. 6, pp 6-7.
- Orenstein, Catherine (1993), "Haiti in the Mainstream Press: Excesses and Omissions", *NACLA Report on the Americas*, Vol. XXVII, No. 1, p. 15.
- Organization of American States. Inter-American Commission on Human Rights (1994), *Report on the Situation of Human Rights in Haiti*. Washington, D. C.: OAS.
- Prince, Rod (1985), *Haiti: Family Business*. Londres: Latin America Bureau.
- Rampton, Sheldon (1994), "Hustling for de Junta: PR Fights Democracy in Haiti", *PR Watch*, Vol. 1, No. 4, pp. 8-10.

Rees-Mogg, William (1994), "Clinton Risks a Necklace of Fire", *The Times*, 19 de septiembre, p. 19.

United Nations (1994), *Report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Haiti*, 18 de marzo. Nueva York: UN.

United Nations. Commission on Human Rights (1993), *Report on the Situation of Human Rights in Haiti Submitted by Mr. Marco Tulio Bruni Celli, Special Rapporteur, in Accordance with Commission Resolution 1992/77*. Nueva York: UN Commission on Human Rights.

United Nations. Department of Public Information (1995), *The United Nations and the Situation in Haiti*. Nueva York: UN Department of Public Information.

USAID (1989), *Haiti Project Paper. Expanded Urban Health Services*. Washington, D. C.: USAID.

_____ (1991), *Haiti Project Paper. Promotion of Business and Export Project (PROBE)*. Washington, D. C.: USAID.

Wilentz, Amy (1990), *The Rainy Season. Haiti since Duvalier*. Nueva York: Simon and Schuster.

World Bank (1998), *Haiti. The Challenges of Poverty Reduction*, Vol. 1. Washington, D. C.: WB.